

Agrotóxicos en la Argentina Un plan criminal y genocida con millones de víctimas inocentes

Si una persona aplicara a otra pequeñas dosis de venenos durante un tiempo, llegando a provocarle daños irreversibles y aún la muerte, seguramente sería condenada por la justicia por su accionar criminal. Pero si una compleja estructura de corporaciones, pools de siembra, funcionarios públicos e instituciones vinculadas, actúan en nuestro país de manera coordinada para llevar a cabo un acto similar pero generalizado, aún con millones de víctimas potenciales, no sólo que mantienen total impunidad sino que obtienen gigantescos beneficios.

Así, mientras las corporaciones extranjeras destruyen y contaminan a mansalva territorio, sociedad y vida, avanzando en un proceso de envenenamiento lento, silencioso (a veces) y masivo, los gobiernos avalan y promueven este gran negocio en beneficio de unos pocos.

Aunque los funcionarios públicos están para defender y representar al pueblo, en realidad actúan como cómplices al servicio del poder económico, permitiendo la fumigación con un coctel de venenos que llega generosamente a más de doce millones de argentinos.

El Justicialismo lo inició...

El avance del modelo de los agronegocios tomó impulso en la segunda mitad de la década del noventa, de la mano del presidente Menem, el ministro Cavallo y el entonces secretario de agricultura Felipe Solá. Este funcionario, antes de autorizar en un vergonzoso trámite sumarísimo la introducción de la soja transgénica, había participado de un estudio para Monsanto sobre el Roundup Ready (RR), la marca estrella de esa empresa con la que se "riega" gran parte de nuestro territorio para eliminar todo vegetal que tenga vida excepto la soja modificada genéticamente para que resista a ese "remedio" comercial.

A pesar de no contar con estudios de impacto ambiental y sólo tener el informe de la propia empresa (en inglés en el mismo expediente oficial), se permitió de manera irresponsable la introducción masiva del paquete soja transgénica-RR. Desde entonces, la expansión del monocultivo (en paralelo a la aplicación del Roundup) fue creciendo y provocando numerosos impactos negativos de todo orden, hasta alcanzar a cubrir hoy casi el 60% de la superficie total cultivable de la Argentina, llegando en algunas provincias como la nuestra a superar los dos tercios de su territorio cultivable.

...El Justicialismo lo profundizó y consolidó...

Pero la gran expansión que tomó este modelo destructivo se produjo a partir del año 2003, de la mano de otro gobierno justicialista, que logró un aumento de la producción de soja transgénica de más del 50%. Junto con ese crecimiento, se profundizaron también las principales consecuencias que acarrea ese modelo: expulsión de la población rural, agotamiento persistente de la capacidad fértil de los suelos, destrucción de la biodiversidad, desplazamiento de otras producciones diversificadas, contaminación de los acuíferos, y más grave aún, la aparición cada vez más evidente de los terribles efectos sobre la salud humana y la vida (numerosos casos de nacimientos con malformaciones, multiplicación de casos de cáncer, en especial en niños y jóvenes, proliferación de muertes de bebés en abortos "espontáneos", etc).

Hoy no sólo conocemos de manera más precisa los horrores de los agrotóxicos a través de la información que surge de los propios afectados, sino también por los muchos informes de médicos de los pueblos fumigados y por las investigaciones de científicos nacionales e internacionales, que dan cuenta de las consecuencias del glifosato y otros componentes del RR sobre los seres humanos.

...Y el sistema partidocrático lo apoya sin cuestionamientos

Pero la responsabilidad de la expansión del modelo no recae únicamente en el partido gobernante en las últimas décadas a nivel nacional, sino que además cuenta con la complicidad de la denominada "oposición responsable", ya sea desde algunas gobernaciones como también en municipios, el congreso nacional y legislaturas provinciales.

Tal vez el hecho más paradigmático de esta múltiple coincidencia lo refleje el actual intento de construir la planta de semillas de maíz transgénico más grande de América del Sur, en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, a escasos diez kilómetros de la capital mediterránea. Este acto de absoluta dependencia de la estrategia de la corporación Monsanto que pone en peligro la salud de esa comunidad, cuenta con el impulso inicial de la presidenta, quien anunció la obra con bombos y platillos en el corazón del imperio del norte, pero cuenta también con el apoyo claro e incondicional del gobernador De la Sota (peronista opositor al gobierno nacional), y con el acompañamiento cómplice del intendente radical de esa localidad.

Este aval que han conseguido los agrotóxicos en todo el país parece ser la evidencia más clara de una verdadera política de estado, a la que adhieren (salvo contadas excepciones) quienes participan en esta democracia condicionada y colonizada. Tiene que ver con que el negocio de los cultivos transgénicos permite enormes ganancias a las grandes corporaciones, pero también da de comer a las arcas públicas y por esa vía permite cierta redistribución de las migajas (con subsidios clientelares) hacia los sectores desplazados por este plan concentrador, contaminante, saqueador y neocolonial.

¿Qué opina el "consenso científico" sobre el efectos de los agrotóxicos?

A casi dos décadas del desarrollo de los productos transgénicos resistentes al glifosato en el mundo, no existen aún evidencias científicas de que los agrotóxicos utilizados para garantizar la rentabilidad del paquete tecnológico sean inocuos para los seres humanos. No hay estudios independientes de las corporaciones que hayan demostrado tal inocuidad, en tanto que cada vez son más numerosas las evidencias científicas sobre el efecto nocivo que causan sobre la salud de la población.

En tal sentido, y siguiendo el principio precautorio que es aceptado en la justicia a nivel internacional y nacional, debería prohibirse el uso de los agrotóxicos hasta que no quede demostrado de manera fehaciente e indubitable que no producen consecuencias negativas sobre la salud. Pero ni nuestros legisladores, ni las Universidades donde se forman los abogados, ni los colegios que los agrupan, se han manifestado a favor de este principio, que protege un derecho humano tan esencial como es el de gozar de un ambiente sano y libre de los peligros que generan los venenos dispersos en el territorio.

Lamentablemente el glifosato y otros productos más agresivos no sólo afectan a quienes reciben la descarga directa de la fumigación (vía la transmisión aérea), sino también llegan a través del impacto residual sobre la misma planta, sobre el suelo y sobre los cursos de agua hacia los cuales deriva lo que no queda adherido a la soja. Además, existen estudios que evidencian la presencia de restos de glifosato en comida elaborada con soja transgénica. Igualmente grave es el maíz transgénico, que desarrolla dentro de la misma planta la toxina BT, que se aseguraba que sólo era dañina a los insectos pero luego se demostró que tiene un fuerte efecto hemotóxico aún en pequeñas dosis (ya que destruyen los glóbulos rojos, perturban la coagulación y causan degeneración orgánica y daño en los tejidos).

Todo esto sin considerar otra consecuencia nociva que generan los productos transgénicos que se usan como alimentos (de manera directa, o indirecta en animales), que aún sin agrotóxicos causan daños a la salud, como lo demuestran estudios científicos realizados en los últimos años en diferentes países del mundo. Esto debería llevar a una moratoria en la utilización de transgénicos para la alimentación, hasta tanto quede demostrado que son inocuos para los seres humanos (algo que parece en principio imposible).

Hacer como que nos protegen, para dar piedra libre a la fumigación

Aunque la investigación científica, la medicina comprometida, la experiencia de casi dos décadas de fumigación y los casos lamentables y cada vez numerosos de afectados, son plena evidencia de los horrores causados por los agrotóxicos; quienes deben protegernos de su uso masivo se esmeran en tratar de disfrazar sus políticas con anuncios de falsos controles que sólo buscan la continuidad de este experimento depredador a cielo abierto en todo el territorio.

A nivel nacional se anuncia para los próximos meses la elaboración de una ley que regule el uso de agrotóxicos, tomando como base un informe oficial elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Entre otras cosas, en ese lamentable informe no participaron profesionales de la salud, ni fueron considerados estudios epidemiológicos que dieran pautas básicas, como tampoco se tienen en cuenta los múltiples efectos subletales y crónicos que causan los agrotóxicos.

También a nivel provincial se viene trabajando en la legislatura entrerriana en una nueva normativa que supuestamente ponga topes al uso indiscriminado de esos venenos, que diplomáticamente el lobby de los agronegocios denomina "remedios". Pero por los avances que se conocen, pareciera que los intentos no apuntan en la dirección de proteger el ambiente y la vida, sino por el contrario buscan dar más libertad al proceso de envenenamiento, con menores resguardo sobre la salud de la población que pueda verse afectada.

Mientras tanto, mientras se hace como que nos protegen, las áreas del Estado que a nivel nacional y provincial tienen relación con este proceso destructivo y criminal (como lo son la producción, la salud y el ambiente) se convierten en cómplices de los criminales y depredadores, dejando a la sociedad en situación de absoluta vulnerabilidad e indefensión.

Sólo el pueblo salvará al pueblo

Algún líder carismático afirmaba en sus discursos que "sólo el pueblo salvará al pueblo". Y quizás sin quererlo haya anticipado la realidad de la Argentina, donde la solución a los graves problemas que soporta el conjunto de la sociedad no aparece del lado del Estado o de la partidocracia tradicional, sino de la concientización, la organización y la resistencia activa en contra de este genocidio que nos conduce al precipicio.

Ante los planes estratégicos de las corporaciones, de hacer nuevos productos con más transgénicos y más agrotóxicos; ante los planes estratégicos anunciados por el gobierno nacional de lograr más producción transgénica ocupando más territorio a costa del desmonte y la expulsión de campesinos de su tierra; debemos apostar a profundizar la resistencia, frenar el modelo concentrador, saqueador y genocida, para comenzar a reconstruir la soberanía alimentaria, con la antigua forma de producir alimentos de manera sana, sustentable, sin agrotóxicos y con los productores en el campo.

Para ello se requieren otras políticas, que apuntalen la pequeña producción diversificada y agroecológica, con un conjunto global de medidas que vayan desde el acceso a la tierra, hasta condiciones dignas de vida y asistencia integral a quienes produzcan, con apoyo técnico de los organismos públicos, formación desde el sistema educativo, servicios adecuados a los que trabajen y vivan en el agro, subsidios, ayudas a la comercialización y planes estratégicos que respondan a los intereses de la sociedad.